

El Perú es un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños que se encuentran sometidos al trabajo forzoso y a la trata con fines de explotación sexual. Los nativos o indígenas peruanos son un sector particularmente vulnerable en la trata de personas. Las mujeres y las jóvenes y en menor grado los jóvenes peruanos, son víctimas de la trata con fines de explotación sexual dentro del territorio nacional. Con frecuencia son reclutadas(os) a través de falsas ofertas de empleo. Las mujeres y las jóvenes que son sometidas a explotación sexual en localidades cercanas a las comunidades mineras, con mucha frecuencia se endeudan debido al costo del transporte y se les hace imposible huir de esos lugares en parte debido a lo remoto de las zonas donde se ubican los campamentos y en parte debido a la complicidad de los mineros en su explotación. La Policía Nacional del Perú calculaba que en La Rinconada, una comunidad minera ubicada en las proximidades de la frontera con Bolivia, había más de 4.500 jóvenes peruanas y bolivianas sometidas a prácticas de explotación sexual. En menor medida, mujeres y niños peruanos son sexualmente explotados en países vecinos – incluyendo Ecuador y Argentina- y mujeres y jovencitas provenientes de países vecinos, particularmente de Bolivia, se ven sometidas a la explotación sexual en el Perú. El turismo sexual infantil está presente en lugares tales como el Cuzco, Lima y la Amazonía peruana.

Hombres, mujeres y niños peruanos son sometidos a explotación laboral, debiendo desempeñar su labor bajo condiciones de trabajo forzoso en el país, principalmente en la minería aurífera informal y servicios relacionados con esa actividad; así como en la actividad forestal, en la agricultura, en la manufactura de ladrillos, en el sector informal de la economía y en el servicio doméstico. Los ciudadanos peruanos que se dedican a la minería aurífera artesanal laboran bajo condiciones de trabajo forzoso. Entre otros métodos utilizados para forzarlos a laborar bajo esas condiciones, se suele utilizar el reclutamiento engañoso, la servidumbre por deudas, restricciones a su libertad para poder trasladarse de un lugar a otro o dejar el lugar, la retención o el no pago de sus salarios y amenazas de violencia física o, inclusive, el uso de la fuerza. El trabajo forzoso que realizan los menores de edad abarca actividades tales como la mendicidad, la venta ambulatoria en la vía pública y la producción y transporte de la cocaína. Continúan habiendo informes que aseguran que el grupo terrorista *Sendero Luminoso* recluta a niños y a adultos para incrementar el número de sus huestes e involucrarlos en el comercio ilícito de estupefacientes. Se puede encontrar a hombres, mujeres y niños peruanos laborando bajo condiciones de trabajo forzoso en Argentina, Chile, Ecuador, Brasil

y los Estados Unidos, entre otros países. El Perú también es un país de destino para víctimas de trabajo forzoso provenientes de otros países, incluyendo Bolivia. Durante el año se descubrió que cinco ciudadanos de la India se encontraban trabajando en un hotel peruano bajo condiciones de trabajo forzoso. Se informó que los inmigrantes haitianos que atraviesan el Perú cuyo último destino es Brasil fueron vulnerables a la trata de personas.

El gobierno del Perú no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas; sin embargo, está desplegando significativos esfuerzos para lograrlo. En el transcurso del año, las autoridades del sector crearon una unidad de inspección laboral dedicada a investigar casos de trabajo forzoso e infantil, incrementaron el número de grupos de trabajo contra la trata de personas a nivel regional y duplicaron el presupuesto del Ministerio del Interior para cubrir las actividades de prevención del delito de trata de personas. A pesar del gran número de víctimas del delito de trata de personas que existe en el Perú, las autoridades no asignaron fondos para dotar de servicios especiales a estas víctimas. Con frecuencia, las autoridades no enviaron a las personas identificadas como víctimas de la trata a ningún lugar donde pudieran recibir alguna atención y en vista de que algunos funcionarios no comprendían plenamente los alcances del delito trata de personas, las víctimas no recibieron la atención debida y los traficantes de personas se vieron beneficiados con la impunidad. La complicidad entre los funcionarios encargados de luchar contra este delito siguió constituyendo un problema grave al que casi no se le prestó ninguna atención y el gobierno dio cuenta de esfuerzos muy limitados por responsabilizar a funcionarios corruptos a través de investigaciones en el área penal, procesos judiciales o sentencias condenatorias. Los esfuerzos desplegados por identificar y brindar ayuda a las víctimas del trabajo forzoso –especialmente aquéllas explotadas en la minería aurífera informal- y para llevar a juicio y condenar a los involucrados en la trata de personas para fines de explotación laboral, fueron inadecuados. Los datos que posee el gobierno acerca de la identificación de las víctimas y de los esfuerzos desplegados por miembros de la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial no son fiables, lo cual dificulta la evaluación de tales esfuerzos.

Recomendaciones para el Perú:

Debe aportar fondos para el mantenimiento de servicios que cubran todas las necesidades de las víctimas del delito de trata de personas, incluyendo a adultos, o –de lo contrario- debe proporcionar fondos a ONGs que posean la capacidad de prestar esos servicios; debe redoblar esfuerzos–de manera significativa- por investigar y procesar a cualquier individuo involucrado en el delito de trata de personas, así como sentenciar y castigar a los traficantes de personas,

particularmente a aquéllos involucrados en delitos relacionados con el trabajo forzoso; a través de investigaciones realizadas en el área penal y la apertura de procesos judiciales debe establecer la responsabilidad de aquellos funcionarios corruptos que ayudan a perpetuar la trata de personas; debe conducir investigaciones proactivas sobre el trabajo forzoso a través de una mayor colaboración entre miembros de la Policía Nacional del Perú, el Poder Judicial, el Ministerio de Trabajo y organizaciones de la sociedad civil; debe crear e implementar mecanismos que se centren en la identificación de las víctimas y faciliten su traslado a lugares idóneos con el fin de evitar su re-victimización, así como coordinar los operativos realizados en forma conjunta entre diversas entidades, inclusive durante operativos jurídico-policiales; debe verificar a través de una supervisión continua que tanto los miembros de la Policía como los de la Fiscalía efectivamente conducen batidas que son producto de labores de inteligencia y que emplean un sistema que les permite confirmar la idoneidad de las víctimas y de los lugares donde las envían; debe asignar fondos que sirvan para incrementar el presupuesto de los Ministerios pertinentes para permitirles cumplir con sus responsabilidades en el área de la trata de personas; debe crear una unidad especializada en la Fiscalía y perfeccionar el sistema utilizado para recopilar datos sobre las entidades responsables de hacer cumplir la ley y la identificación de las víctimas.

Procesos Judiciales

El gobierno del Perú informó que había confirmado las sentencias condenatorias de un número importante de traficantes de personas. Sin embargo, sus esfuerzos por investigar y llevar a juicio a los traficantes de personas no siempre tuvieron éxito y la complicidad oficial continuó siendo preocupante. La Ley 28959 prohíbe todas las modalidades del delito de trata de personas, habiendo establecido penas de entre 8 y 25 años de prisión, que son lo suficientemente estrictas y acordes con las establecidas para otros delitos graves, tales como la violación. En el año 2013, el Congreso peruano promulgó una ley que permitía que diferentes tipos de delincuentes, incluyendo a los traficantes de personas sentenciados por delitos de trata agravada, pudieran solicitar y obtener recortes en sus años de carcelería. Algunos efectivos policiales, fiscales y jueces colocaron a los delitos de trata de persona en la misma categoría que otros delitos, tales como el proxenetismo; delitos para los que se ha establecido penas menos duras. La Defensoría del Pueblo reportó que los jueces frecuentemente no sentenciaban a los traficantes de personas por casos de trata agravada en los que las víctimas eran menores de edad, tal como lo estipula la ley. Las autoridades a cargo de hacer cumplir las leyes continuaron confundiendo la práctica de la prostitución con los casos de trata de personas para fines de explotación sexual, lo cual resultó en la obtención de datos poco fiables.

La recopilación de datos continuó siendo una tarea muy poco confiable. La Policía no utilizó una base de datos electrónica sobre casos de trata de personas –con la que ya contaba- o para hacer un seguimiento a las investigaciones sobre este delito, tal como lo exige la ley, pero por vez primera funcionarios del Poder Judicial informaron que contaban con datos más exactos sobre el número de sentencias condenatorias que había sido impuesto. No hubo datos confiables sobre el número de investigaciones iniciadas en el 2013, conducidas por la Policía anti-trata de personas. Los fiscales reportaron que había más de 200 investigaciones en curso sobre trata de personas en el año 2013, pero no especificaron cuántas de estas investigaciones resultaron en procesos judiciales. En el año 2013, 41 traficantes de personas recibieron sentencias condenatorias, incluyendo sentencias condenatorias impuestas en anteriores años que fueron confirmadas por instancias superiores. De conformidad con la legislación peruana, la adopción ilegal y el tráfico de órganos pueden ser juzgados como modalidades del delito de trata de personas y algunas de estas sentencias condenatorias podrían haber sido impuestas por estos delitos. En la gran mayoría de estos casos las víctimas fueron menores de edad y las autoridades no informaron sobre los años de carcelería impuestos por estos delitos. Un juzgado revirtió la sentencia absolutoria que en enero del 2013 favoreció a varios traficantes de personas en un caso muy notorio de trata de personas con fines de explotación sexual y en el mes de diciembre del 2013 impuso sentencias condenatorias a cuatro traficantes de personas que formaban parte de esta causa. El juez les impuso penas que iban desde una sentencia de 4 años de carcelería suspendida y el pago de una pequeña multa a 15 años de prisión. Dos de estos traficantes de personas apelaron sus sentencias y el principal traficante continuaba siendo un prófugo de la justicia.

La sede de la división de la Policía encargada de la lucha contra la trata de personas estuvo en la capital y una unidad más pequeña operó en la ciudad de Iquitos. La eficacia de esta división, particularmente fuera de la capital, se vio afectada por la escasez de recursos y por el recambio frecuente de efectivos policiales. No hubo fiscales a los que se les encargó únicamente ocuparse de casos de trata de personas; muchos fiscales locales con demasiada carga de trabajo no estaban familiarizados con ese delito. Los efectivos policiales y los fiscales continuaron viéndose afectados por una falta de coordinación entre ellos. La falta de una coordinación efectiva entre los oficiales encargados de hacer cumplir la ley en diferentes partes del país resultó en demoras significativas al momento de intentar rescatar a las víctimas y de investigar los casos de trata de personas. La mayoría de los operativos llevados a cabo por los efectivos policiales y los fiscales se centraron en los casos de trata de niños para fines de explotación sexual y tanto

las investigaciones oficiales llevadas a cabo por el propio gobierno como aquellas llevadas a cabo por ONGs concluyeron que tanto los procesos judiciales como las sentencias condenatorias en casos de trabajo forzoso continuaron siendo desproporcionadamente bajos. En algunas partes del país, la falta de una presencia del Estado, la falta de servicios y albergues para las víctimas y el temor que sentían los funcionarios/oficiales de sufrir represalias de parte de los traficantes de personas, les impidió investigar las denuncias sobre casos de trabajo o prostitución forzoso(a). En colaboración con organizaciones de la sociedad civil y frecuentemente contando con fondos donados por organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros, el gobierno peruano ofreció capacitación en el área de la lucha contra la trata de personas a efectivos policiales, fiscales y otros funcionarios. En enero del 2014, fiscales peruanos llevaron a cabo coordinaciones con autoridades ecuatorianas en una investigación conjunta sobre trata de personas para fines de explotación sexual. Algunos efectivos policiales y fiscales no comprendieron a cabalidad en qué consistía el delito de trata de personas y tendieron a culpar a las víctimas de la explotación a la que estaban siendo sometidas o, de lo contrario, se negaron a iniciar investigaciones en el área de lo penal y abordaron los casos como si se tratara de meras irregularidades laborales o casos de jóvenes que habían huido de su hogar. En esta última figura, tanto las ONGs como la Defensoría del Pueblo señalaron que los oficiales o funcionarios en la práctica trasladaron la culpa del tratante de personas a los miembros de la familia de la víctima, acusándolos de negligencia o abandono. Según se dice, algunos fiscales se negaron a iniciar una investigación, en algunos casos debido a que no creían en la versión de la víctima a pesar de que existía otra evidencia disponible. Una ONG y la Defensoría del Pueblo informaron que miembros de una unidad especializada de la Policía Nacional, encargada de luchar contra la trata de personas actuaron de una manera inapropiada en un caso que involucró a una víctima (adolescente) de la trata para fines de explotación sexual, lo cual traumó a la víctima, hizo posible que el tratante que la explotaba pudiera escapar y la grabación de su testimonio fue filtrado a estaciones de radio y canales de televisión, lo cual hizo público el nombre de la víctima.

La complicidad oficial siguió constituyendo un serio desafío. Tanto los funcionarios del gobierno como las organizaciones de la sociedad civil informaron que efectivos policiales extorsionaban a dueños de discotecas bajo la amenaza de presentar cargos de trata de personas contra ellos. Las víctimas informaron a las ONGs que los efectivos policiales presentaron denuncias falsas contra las víctimas que intentaban escaparse de los bares o burdeles, acusándolas de delitos tales como el hurto; las forzaron a firmar declaraciones en las que liberaban de culpa a los traficantes de personas que las habían tenido retenidas; les exigieron que les dieran

dinero por cumplir con su trabajo, incluyendo las batidas y sugirieron que los miembros de las familias de las víctimas debían rescatarlas por su cuenta. Funcionarios de gobierno y ONGs denunciaron que los efectivos policiales solían extorsionar a mujeres dedicadas a la prostitución y las amenazaban con arrestarlas y acusarlas de estar involucradas en la trata de personas; estos actos intimidatorios sirvieron para disuadir a las víctimas del este delito de reportar su situación de explotación. El hecho de que algunos funcionarios tuvieran vínculos con la industria minera ocasionó un conflicto de intereses e impidió que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tomaran medidas contra la trata de personas para fines de explotación sexual o contra los casos de trabajo forzoso en las zonas mineras. ONGs y la oficina de la Defensoría del Pueblo en Madre de Dios informaron que los fiscales solían aceptar dinero de los traficantes de personas para enviar a los niños que habían sido víctimas de la trata de personas para fines de explotación sexual a sus hogares a cambio de retirar los cargos que pesaban contra ellos o de falsificar las declaraciones hechas por las víctimas con el propósito de exonerar a los traficantes de personas. Continuaban pendientes denuncias penales contra dos fiscales que fueron suspendidos temporalmente en el 2012 por haber aceptado dinero para interferir con el proceso judicial de un tratante de personas. En febrero del 2014, en la ciudad de Lima, las autoridades arrestaron a un comandante de la Policía dedicado a la investigación de delitos, por supuestamente haber aceptado un soborno para que no investigara un caso de trata de personas. El gobierno no informó sobre la realización de ningún juicio ni la imposición de ninguna sentencia condenatoria en el caso de algún empleado de gobierno que hubiese estado involucrado en el delito de trata de personas.

Protección

El gobierno peruano no proporcionó servicios idóneos a las víctimas del delito de trata de personas y no destinó fondos necesarios para ofrecerles cuidados especializados. Las autoridades no desarrollaron ni emplearon procedimientos sistemáticos que los ayudaran a identificar a las víctimas de este delito entre las poblaciones vulnerables. Los oficiales de la Policía estuvieron muy poco preparados como para poder establecer la diferencia –durante las batidas– entre aquellas mujeres dedicadas a la prostitución y las víctimas de la trata de personas para fines de explotación sexual y pensaban que, durante las batidas, las víctimas adultas se podrían auto identificar mientras permanecían delante otras víctimas potenciales y los traficantes de personas. El gobierno no mantuvo estadísticas confiables sobre la identificación de las víctimas. La Policía informó que había identificado a 665 víctimas del delito de trata de personas en el 2013, incluyendo a 617 mujeres adultas, 22 hombres adultos, 19 niñas y 6 niños. Del número total de menores de edad víctimas de este delito identificados en el 2013, se determinó que

15 de ellos estaban siendo sometidos a trabajos forzosos y siete estaban siendo retenidos para fines de explotación sexual.

El gobierno no contó con ningún procedimiento a través del cual pudiera enviar a las víctimas a los lugares donde les podrían ofrecer ayuda y no quedó claro cuál fue el número total de víctimas a las que se le proporcionó algún servicio, incluyendo un albergue donde quedarse. Varios Ministerios informaron que contaban con protocolos internos de ayuda a las víctimas, aunque sólo unos cuantos de ellos fueron implementados durante el 2013. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) fue la entidad responsable de llevar a cabo las coordinaciones del caso y, conjuntamente con los gobiernos regionales, poner a disposición de las víctimas los servicios proporcionados por el gobierno. Sin embargo, el Ministerio y los gobiernos regionales no contaron con los fondos necesarios ni tuvieron la capacidad para cumplir con este mandato. Los efectivos policiales y fiscales no siempre informaron a las víctimas que podían acudir al MIMP o a otros proveedores de servicios e informaron que –debido a que un número muy limitado de personal trabajaba durante los fines de semana y durante horas de la noche (que justamente era cuando se llevaban a cabo la mayoría de batidas) resultaba muy difícil enviar a las víctimas a estos lugares. La Policía ofreció un albergue temporal a las víctimas luego de efectuadas las redadas. Sin embargo, en algunos casos, los niños o niñas víctimas debieron permanecer en las comisarías por varios días cuando no hubo refugios adecuados disponibles. Luego de tomar nota de los testimonios de las víctimas, la Policía con frecuencia envió a las víctimas a sus casas –usualmente sin haber realizado una adecuada investigación para establecer si la familia de la víctima había tenido algo que ver con la explotación de la que había sido objeto-, valiéndose de la colaboración de la sociedad civil o de los propios traficantes de personas para cubrir su retorno a casa, en lugar de enviarlos a algún lugar de acogida.

En la mayor parte del país, las víctimas del delito de trata de personas no contaron con servicios especializados. Las organizaciones de la sociedad civil –sin contar con fondos proporcionados por el gobierno- ofrecieron una gran parte de los servicios especializados a las víctimas y en muchas regiones del país, no fue posible recibir atención psicológica, ayuda legal u otros servicios especializados, particularmente en el caso de personas adultas. Dos refugios para niñas que fueron víctimas del delito de trata de personas para fines de explotación sexual estaban en capacidad de dar refugio a menores que habían sido víctimas de este delito, aunque éstos no se encontraban lo suficientemente equipados como para poder proporcionar una atención especializada a las víctimas de la trata. Otros refugios que también estuvieron administrados por el Estado destinados a atender a niños en

condición de vulnerabilidad carecían de una infraestructura básica, incluyendo suficiente espacio que les permitiera albergar a las víctimas. Igualmente, los centros de emergencia para mujeres administrados por el Estado no proporcionaron ningún servicio especializado a las víctimas de la trata, incluyendo la disponibilidad de algún albergue; estos centros reportaron haber brindado ayuda a 28 víctimas de la trata durante el año. Dos diferentes proyectos diseñados para construir albergues especializados para menores de edad que hubieran sido víctimas de la trata en la Región de Madre de Dios, contando con fondos donados por entidades extranjeras y el apoyo de la sociedad civil, se vieron paralizados como resultado de la incapacidad del gobierno regional para cumplir con compromisos asumidos sobre el proyecto y un gobierno local en la Región se negó a que una ONG utilizase un nuevo albergue inoperativo construido por el gobierno para atender a las víctimas de la trata. No existieron servicios especializados para víctimas del sexo masculino. Aunque las autoridades informaron que les era posible asumir el costo de la repatriación de víctimas peruanas explotadas en el extranjero, no especificaron el número de víctimas peruanas que fue repatriado en el 2013 y no hubo fondos para ayudar a reintegrarlos en la sociedad ni brindarles otros servicios.

La participación de las víctimas en la investigación o el enjuiciamiento de los traficantes continuó siendo muy limitada. El gobierno debía poner un abogado a disposición de las víctimas; sin embargo, en el 2013, el número de víctimas al que se le asignó uno no quedó claro. Las ONGs y la Defensoría reportaron que las víctimas recibieron una protección y asistencia inadecuadas durante el proceso de investigación y enjuiciamiento de los traficantes y muchas víctimas se vieron sometidas a interrogatorios agresivos, sin tener junto a ellas a un abogado o a algún miembro de su familia. Luego de transcurridos dos años de permanecer en condición de testigo protegido, una víctima eligió no seguir perteneciendo a este programa, debido a que bajo el mismo no se le permitía movilizarse a su antojo, ver a su familia cuando lo deseaba ni buscar empleo. Algunos policías, fiscales y jueces no protegieron suficientemente bien la privacidad de las víctimas de trata, incluyendo el proporcionar sus nombres y detalles de sus casos a miembros de la prensa. No hubo informes que indicaran que el gobierno sancionó a las víctimas por los actos ilícitos cometidos como consecuencia directa de haber sido víctimas de la trata. Los extranjeros, víctimas de la trata, tuvieron derecho a que se les concediera un estatus de residencia temporal o permanente de conformidad con la ley peruana para refugiados, aunque el gobierno no informó acerca del número de víctimas (en caso de haberlas habido) a las que se les hubiera concedido este estatus durante el 2013.

Prevención

El gobierno de Perú continuó esforzándose por prevenir este delito y, entre otras medidas, ofreció su apoyo a grupos de trabajo y planes de acción contra la trata a nivel regional. La comisión intersectorial creada por gobierno, que también incluyó entre sus miembros a actores de la sociedad civil, se reunió de manera regular, aunque algunas ONGs y algunos funcionarios informaron que la comisión se vio perjudicada por una falta de compromiso de parte de algunos de los Ministerios que la conforman. La mayoría de entidades gubernamentales continuaron careciendo de fondos suficientes como para permitirles poder cumplir con sus responsabilidades de acuerdo a lo indicado en el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas y el Ministerio del Interior fue el único Ministerio que contó con un presupuesto especialmente asignado para la lucha contra el delito de trata de personas. El presupuesto del Ministerio del Interior asignado para cubrir acciones de naturaleza preventiva se duplicó; en el 2013 se asignó un monto equivalente a \$142.000, mientras que en el 2014 la cantidad asignada para estas acciones ascendió a un monto aproximado de \$355.400. Varios Ministerios desplegaron esfuerzos por sensibilizar a la población sobre el problema, a menudo lo hicieron en colaboración con organizaciones de la sociedad civil y contando con fondos provenientes de donantes extranjeros. Diecinueve gobiernos regionales continuaron manteniendo entre su personal a grupos de trabajo que combatieron el delito de trata de personas, cuya efectividad fue variada. En el 2013, las autoridades aprobaron un segundo Plan Nacional de Acción contra el Trabajo Forzoso, aunque la falta de fondos asignados para este esfuerzo dificultó su implementación. En el 2013, las autoridades destacaron a 16 inspectores laborales a una unidad revitalizada que centró sus esfuerzos en la lucha contra el trabajo infantil o forzoso; sin embargo, la unidad aún no se encontraba plenamente operativa durante el período cubierto por este informe. El gobierno no reportó haber conducido ninguna inspección laboral con el fin de identificar casos de trabajo forzoso realizado por menores de edad en actividades de la minería artesanal durante el 2013. Los inspectores laborales multaron a dos compañías por violaciones laborales que involucraban la trata de personas para fines de explotación laboral; sin embargo no se pudo determinar si estos casos también resultaron en investigaciones en el área de lo penal. Durante el 2013, las autoridades no reportaron la apertura de ningún proceso judicial ni la imposición de ninguna sentencia condenatoria de personas que participaron en turismo sexual con menores de edad; tampoco informó sobre algún esfuerzo desplegado por el gobierno para reducir la demanda por el comercio sexual. El gobierno no reportó el haber proporcionado a aquellos ciudadanos peruanos a los que se les encargó tareas de mantenimiento de la paz una capacitación específica sobre el delito de

trata de personas con anterioridad a su desplazamiento al extranjero para realizar tareas relacionadas con el mantenimiento de la paz.